

PERCEPCIONES MEXICANAS DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS: EL CASO CAMARENA SALAZAR*

JUAN DAVID LINDAU

LAS RELACIONES DE MÉXICO con Estados Unidos nos permiten hacer un estudio sobre el grado en que influyen las percepciones en la política internacional. En su calidad de "parte débil", México es muy sensible a las motivaciones que subyacen las políticas de Estados Unidos. En consecuencia, en ciertas ocasiones tiende a percibir erróneamente los propósitos norteamericanos. Las percepciones equivocadas se originan en falta de comprensión de las intenciones y del poder de Estados Unidos; reducen la capacidad de México para analizar e interpretar acertadamente las acciones de su vecino. Los malentendidos complican sin necesidad las relaciones entre ambos países. En particular, como se verá en este artículo, fallas de percepción pueden llevar al gobierno mexicano a cometer errores de juicio que tienen costos políticos elevados tanto en el plano interno como en el exterior.

Esto no significa que todos los problemas en las relaciones entre México y Estados Unidos sean meramente resultado de percepciones erróneas. En muchos casos sí hay conflicto objetivo de intereses. En cuestiones como precios del petróleo, migración y deuda, para mencionar sólo algunos temas sobresalientes, es claro que, a pesar de algunos puntos de acuerdo, existen diferencias fundamentales. Sin embargo, las percepciones equivocadas a menudo exacerban tensiones o crean problemas que de otra forma no surgirían.

Hay varios temas recurrentes en la percepción mexicana de las relaciones con Estados Unidos. En general, se cree en México que las políticas norteamericanas se formulan de una manera muy coherente y con propósitos claros. En otras palabras, se supone que son políticas diseñadas para influir en toda una gama de materias. Se llega a pensar que algunas políticas de Estados Unidos elaboradas específicamente para tratar cierto problema, en realidad tienen el propósito de ejercer presión

* Traducción de Santiago Quintana.

respecto a otro asunto. De ahí la propensión a interpretar las medidas estadounidenses dirigidas a México desde una perspectiva maquiavélica. Rara vez se ven éstas como hechos aislados; en general se consideran parte de una estrategia amplia, con fines a largo plazo. Al atribuir planeación cuidadosa y previsión a quienes elaboran las políticas norteamericanas, esta percepción ignora la naturaleza reactiva y no coordinada de los procesos de toma de decisiones en Estados Unidos, y se acompaña de la tendencia a exagerar la capacidad de la superpotencia para formular y ejecutar su política exterior. La impresión de que Estados Unidos origina gran parte de lo que sucede en México, refleja una sobrestimación del poder norteamericano y de la importancia que concede Estados Unidos a su vecino. Tal vez por la gran influencia que se atribuye en México a la relación con Estados Unidos, se cree que este país otorga a esa relación más peso del que le concede en realidad. Esto nutre la tendencia a exagerar la planeación que pueda haber en la política norteamericana.

Una característica sobresaliente de la diplomacia mexicana es su contenido nacionalista. No sorprende que, dada la localización geográfica del país y su experiencia histórica, este nacionalismo se dirija principalmente hacia Estados Unidos. De hecho, precisamente por estos factores, la política exterior de México ha procurado establecer independencia y distancia política respecto a la superpotencia. Es por eso que, a menudo, el gobierno mexicano ha adoptado una posición que contrasta marcadamente con la estadounidense. Por otra parte, el deseo declarado de seguir una política exterior muy independiente no deja de tener riesgos. Una percepción errónea de la importancia que atribuye a un problema Estados Unidos, puede hacer que México presente resistencia a iniciativas norteamericanas en su etapa inicial, cuando tienen carácter más "privado"; llega luego un momento en que Estados Unidos utiliza formas de presión mucho más visibles; en ese punto, el gobierno mexicano corre el riesgo de verse forzado a capitular en público; si esto ocurre, el gobierno parece débil e indeciso, lo que significa un fracaso de su política y le acarrea, en forma gratuita, una pérdida de popularidad considerable.

En la primavera de 1985, un acontecimiento dominó las relaciones entre Estados Unidos y México: el secuestro y asesinato del agente de la *Drug Enforcement Agency* (DEA) Enrique Camarena Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala Aguilar. La forma en que se manejó este hecho y las reacciones que provocó, lo convierten en ejemplo particularmente bueno de los temas recurrentes que condicionan las relaciones de México con Estados Unidos.

El 7 de febrero de 1985, Camarena Salazar fue secuestrado por hombres armados frente al consulado norteamericano en Guadalajara; el mismo día secuestraron a Zavala. En un principio, la prensa mexicana prestó muy poca atención a las desapariciones. Su cobertura se limitó, esencialmente, a un anuncio discreto de los hechos. Esta poca atención duró varios días. Al principio, las investigaciones de las autoridades mexicanas carecieron de brillo, igualmente. Frustrado por el poco progreso que había en el caso, el gobierno norteamericano expresó insatisfacción.

El 12 de febrero, John Gavin, embajador de Estados Unidos en México, y Frances Mullen, de la DEA, concedieron una conferencia de prensa en la embajada norteamericana sobre el volumen y la naturaleza del tráfico de drogas de México hacia su país. Entre otras cosas, revelaron que 75 individuos, organizados en 18 bandas, controlaban este tráfico, y que 38% de la heroína que entraba a Estados Unidos provenía de México.¹ Ante el silencio oficial mexicano, ésta fue la primera declaración pública después de los secuestros. También se dio a conocer, en esa conferencia de prensa, que se habían asignado a México 30 agentes de la DEA de tiempo completo.²

Este segundo dato motivó la primera reacción mexicana de importancia. Muchos expresaron asombro escandalizado ante la circunstancia de que agentes extranjeros actuaran en territorio mexicano con el conocimiento y la anuencia del gobierno de México. Dada la sensibilidad mexicana al papel de Estados Unidos, para muchos esa situación implicaba una violación clara e intolerable de la soberanía nacional.³

La conferencia de prensa fue sólo la primera carga en una campaña del gobierno de Estados Unidos para presionar a México, a fin de que tomara cartas en el asunto. El vocero principal del descontento norteamericano fue el embajador John Gavin, hacia quien se dirigió el enojo mexicano por la forma en que Estados Unidos manejó el asunto. Esto no fue nada nuevo para el embajador, acostumbrado a provocar reacciones particularmente fuertes. Su disposición a expresarse con franqueza sobre cuestiones que, en opinión de gran número de mexicanos, atañen exclusivamente a México, desde tiempo atrás lo había hecho un embajador muy controvertido; su actuación pública llamativa lo convirtió en *bête noire* de muchos, sobre todo de la izquierda.⁴

En los primeros días después de los secuestros, la frustración de Estados Unidos ante la lentitud de la investigación del gobierno mexicana-

¹ *Proceso*, núm. 433, 18 de febrero de 1985, p. 12.

² *Proceso*, núm. 435, 4 de marzo de 1985, p. 16.

³ *Proceso*, núm. 433, pp. 12-17; núm. 435, pp. 16-23.

⁴ *Proceso*, núm. 433, pp. 12-13.

no, creció a raíz de declaraciones de funcionarios que restaban importancia al incidente. Uno de los miembros del gabinete, por ejemplo, manifestó sorpresa en cuanto a que el secuestro de un simple agente provocara tal escándalo, si mataban soldados norteamericanos por todo el mundo sin que eso tuviera consecuencias.⁵

El secuestro pronto atrajo la atención de los medios masivos de difusión en Estados Unidos. Comenzaron a aparecer abundantes artículos sobre el tema,⁶ en los que funcionarios norteamericanos expresaron su frustración; éstos manifestaron sus preocupaciones también en entrevistas por televisión. Por ejemplo, en declaraciones para *Today Show*, de la NBC, el embajador Gavin dijo:

Le expresé (al presidente de México) nuestra preocupación de que, en efecto, esto no estaba llevándose a cabo tan vigorosamente como debiera; que estábamos agradecidos por la cooperación que estaban brindándonos el procurador general de la República y otros elementos de este gobierno, pero que mi gobierno estaba extremadamente preocupado, porque conforme pasaba el tiempo disminuían las posibilidades de rescatar a este excelente funcionario (Camarena).⁷

La muerte o desaparición de varios ciudadanos norteamericanos en Jalisco, el año anterior, había propiciado una oleada de reportajes en la prensa estadounidense. Los artículos describían una situación en que los turistas debían temer por su vida.⁸ El secuestro de Camarena revivió estas historias, y el Departamento de Estado consideró, incluso, la posibilidad de emitir un *Travel Advisory* (advertencia oficial de peligro para los viajeros) respecto a esa región de México.⁹ Por la importancia considerable del turismo para la economía mexicana, esa medida habría causado grave daño al país. Relatos negativos sobre México, combinados con rumores sobre la inminencia del *Travel Advisory*, hicieron pensar a muchos mexicanos que todo era resultado de una campaña concertada, muy bien organizada, del gobierno de Estados Unidos.¹⁰

⁵ *Proceso*, núm. 434, 25 de febrero de 1985, p. 21.

⁶ En este periodo aparecieron artículos sobre ese tema en casi todos los periódicos importantes de Estados Unidos. También revistas como *Newsweek* y *Time* concedieron mucho espacio al tema.

⁷ *Proceso*, núm. 434, p. 19.

⁸ *Time*, 4 de marzo de 1985, pp. 30-32.

⁹ *Proceso*, núm. 434, p. 18.

¹⁰ *Proceso*, núm. 432, 11 de febrero de 1985, pp. 12-15; "Campaña contra México", *Excelsior*, 3 de abril de 1985, p. 7; "Bajó el turismo de E.U. por publicidad adversa", *Excelsior*, 3 de marzo de 1985, pp. 5, 26.

Desde esta perspectiva, la campaña se había concebido con el fin de presionar a México para que cediera en toda una gama de cuestiones de política exterior, en particular la de Centroamérica. Si bien mucho de lo que se publicó en Estados Unidos se originó, tal vez, en la Casa Blanca, la creencia de que todos los reportajes estaban coordinados demuestra falta de comprensión de las relaciones entre el poder público y la prensa en ese país. Al extrapolar, quizá, la situación de México, esta perspectiva exagera la "influencia editorial" del gobierno estadounidense sobre los diarios.

Irónicamente, si el embajador Gavin se convirtió en foco del descontento mexicano por el manejo norteamericano del problema, en la práctica también bloqueó algunas políticas que habrían tenido los efectos más dañinos en México: el hecho de que no se expidiera un *Travel Advisory* se debió principalmente a sus esfuerzos.¹¹

El gobierno de Estados Unidos siguió presionando al de México. El 14 de febrero, el procurador general, William French Smith, envió un cable a su contraparte, Sergio García Ramírez, que decía: "Le exhorto a seguir toda pista, a comprometer todo recurso y a afirmar el compromiso de su presidente de combatir las acciones de estos narcotraficantes."¹²

Para expresar descontento por la pasividad del gobierno mexicano, la embajada estadounidense ofreció una recompensa de 50 000 dólares por cualquier información sobre los secuestros. En los reportajes que comenzaron a aparecer en la prensa de Estados Unidos, quedó claro que las autoridades norteamericanas estaban molestas no sólo por la falta de energía en la investigación, sino por indicios en aumento de que funcionarios mexicanos y policías estaban vendidos a los narcotraficantes. Estos policías obstaculizaban la investigación o eran cómplices activos. Aparecieron numerosos artículos en la prensa norteamericana que describían con detalles y condenaban la corrupción en México.¹³ Para muchos mexicanos, este examen crítico de las limitaciones del país resultó muy humillante.

Quedó fuera de duda, sin embargo, que elementos de la policía mexicana malograron u obstaculizaron la investigación. Por ejemplo, de acuerdo con la prensa estadounidense, agentes de la DEA siguieron la pista a uno de los más grandes traficantes de cocaína, Juan Matta Ba-

¹¹ *Proceso*, núm. 434, p. 22.

¹² *Proceso*, núm. 433, p. 17.

¹³ *Newsweek*, 4 de marzo de 1985, pp. 18, 20; 11 de marzo de 1985, p. 25; 18 de marzo de 1985, pp. 28-30, 32; 1 de abril de 1985, p. 42, y *Time*, 1 de abril de 1985, p. 27.

llesteros, descubrieron el departamento que habitaba en la ciudad de México, el 14 de febrero, y pidieron a la policía mexicana que lo arrestara. Los reportes también alegaron que el jefe de la Policía Federal Judicial de México, Manuel Ibarra Herrera, personalmente retrasó el allanamiento casi un día. Cuando llegó la policía, el 17 de febrero, el narcotraficante se había esfumado. Además, dos días después del secuestro, agentes de la DEA pidieron a la policía mexicana que evitara que Rafael Caro Quintero, otro gran narcotraficante, saliera en su avión de Guadalajara. La policía no hizo caso de esta petición y permitió que despegara la nave.¹⁴

En respuesta a los artículos en la prensa norteamericana, los medios de difusión de México comenzaron a publicar reportajes sobre la drogadicción en Estados Unidos.¹⁵ Con mucha justificación, estos artículos argumentaron que la demanda es la causa principal del tráfico de drogas. Numerosos editoriales en periódicos mexicanos prestigiados trataron este tema. He aquí un ejemplo representativo: "Aquí más bien lo que sucede [...] es que, ante el fracaso de la política norteamericana en su lucha contra el consumo de los estupefacientes, Washington trata de convencer a la opinión pública de que los culpables somos los mexicanos [...]." ¹⁶

El sábado 16 de febrero de 1985, Estados Unidos tomó una medida que marcó la culminación de la crisis y sólo puede interpretarse como tentativa de presionar a México para realizar una investigación más vigorosa: anunció inspecciones aduanales extraordinarias a lo largo de su frontera del sur. La decisión se tomó, según fuentes norteamericanas en México, porque "los secuestradores intentarían introducir subrepticamente a Camarena Salazar a Estados Unidos".¹⁷ Esta explicación se recibió en México con escepticismo, pues parecía poco probable que los criminales intentaran hacer eso.¹⁸ En cambio, la lógica indicaba que el bloqueo era una forma en que Estados Unidos manifestaba descontento hacia México y ejercía presión sobre el gobierno mexicano.

Éste reaccionó con sorpresa a las inspecciones fronterizas. Varios días después de iniciadas, el secretario de Relaciones Exteriores, Ber-

¹⁴ *Newsweek*, 4 de marzo de 1985, p. 18.

¹⁵ *Proceso*, núm. 433, pp. 14-15; "Comercio de drogas: fruto del coloniaje", *Excélsior*, 1 de marzo de 1985, pp. 7, 8; "Inunda la droga las calles de Washington", *Excélsior*, 6 de marzo de 1985, p. 1, 12.

¹⁶ "Conducta deleznable", *Excélsior*, 8 de marzo de 1985, p. 8.

¹⁷ *Time*, 4 de marzo de 1985, p. 30.

¹⁸ *Excélsior*, 27 de febrero de 1985. (Editorial reproducido de *El Diario de Monterrey*.)

nardo Sepúlveda, indicó que no se había informado al gobierno mexicano de esas medidas por los canales diplomáticos. También dijo que “no encontramos ninguna justificación para ello”. Sepúlveda señaló, además, que si el propósito de las inspecciones era la prevención del tráfico de drogas, las autoridades mexicanas serían las primeras en llevarlas a cabo, “pero, infortunadamente, éste no es el procedimiento para eliminar el narcotráfico”.¹⁹

Varios partidos de izquierda manifestaron su convencimiento de que la Operación Interceptación de Estados Unidos era parte de una campaña más amplia contra México. El Partido Popular Socialista (PPS) declaró que el gobierno de Reagan no perdía oportunidad para atacar a su vecino. Cualquier hecho era motivo para desatar una campaña con el fin de desacreditar a México, difundir la imagen de un país al borde de la guerra civil, someterlo y aumentar su dependencia. Los partidos de izquierda afirmaron también que la política exterior mexicana siempre ha provocado una reacción adversa en Estados Unidos. Esto era particularmente cierto como resultado del papel de México en el Grupo Contadora.²⁰ Manuel Stephens, un líder de la izquierda, declaró:

Hay que recordar que el fondo verdadero del asunto de estas presiones contra México es la política que nuestro país sostiene respecto a los problemas de Centroamérica, que son alentados por el imperialismo. Es decir, el imperialismo yanqui está empeñado en derrotar a una política pacifista y negociadora para Centroamérica.²¹

Muchos otros, que no son izquierdistas, atribuyeron las mismas motivaciones a la política norteamericana. Adrián Lajous, que fue alto funcionario en el sector financiero del gobierno, escribió en un editorial de *Excelsior*:

La Operación Interceptación que llevó a cabo Estados Unidos fue una manera de torcernos el brazo, pero más bien tuvo el efecto de provocar sentimientos antinorteamericanos en una buena parte de la población de nuestro país [...] Dudo que acciones como éstas hagan que el gobierno modifique su postura en Centroamérica.²²

¹⁹ “No fuimos informados de dicha acción: Sepúlveda”, *Excelsior*, 19 de febrero de 1985, p. 11.

²⁰ “Convirtió E.U. un problema policiaco en bandera política contra México: PSUM”, *Excelsior*, 20 de febrero de 1985, pp. 1, 21.

²¹ “Policías de E.U. aquí, soberanía lesionada”, *Excelsior*, 7 de marzo de 1985, p. 8.

²² “Estados Unidos, amigos no, sólo intereses”, *Excelsior*, 1 de marzo de 1985, pp. 7, 8.

Otra opinión representativa fue la de Lorenzo Meyer, uno de los académicos más respetados del país, quien escribe con frecuencia para *Excélsior*. Dijo en uno de sus editoriales:

Es necesario buscar un motivo más a fondo que haga de la Operación Interceptación algo más “racional”. Lo único que se me ocurre es la política que México ha seguido en Centroamérica desde 1979 [...] El enojo y la impaciencia del gobierno estadounidense frente a la política de México hacia Nicaragua, Cuba y El Salvador, son de todos conocidos [...] Los Estados Unidos se muestran cada vez menos dispuestos a tolerar acciones independientes en Centroamérica; por lo tanto, es imposible no ver en dicha medida [las inspecciones] un mensaje a México en ese sentido.²³

Casi sin excepción, los editoriales que aparecieron en la prensa mexicana reflejaron, implícita o explícitamente, el presupuesto de que la acción de obstaculizar el tránsito fronterizo estaba pensada para influir en la política de México hacia Centroamérica. El narcotráfico, en general, y el secuestro de un agente norteamericano de la DEA, en particular, desde la perspectiva de muchos mexicanos, tenían poca importancia. Por ende, ya que las medidas que adoptó Estados Unidos a raíz del secuestro eran tan humillantes, sólo adquirirían sentido si se vinculaban con una cuestión más “importante”, como la de Centroamérica. Reflejando esta perspectiva, Lorenzo Meyer escribió en el editorial antes citado: “La humillación que acaba de sufrir a manos del procurador general de los Estados Unidos el gobierno [de México], es un castigo fuera de proporción con la causa aparente, es decir el narcotráfico”.

Todo esto explica por qué muchos mexicanos no entendieron los propósitos y las motivaciones que subyacieron esta política norteamericana, lo que redujo sus posibilidades de responder a ella. Condicionado, tal vez, por todo lo que se decía respecto a que estas políticas eran tentativas de presionar al país para que modificara su política exterior, el secretario Sepúlveda se sintió obligado a declarar que México no renunciaría a “la legítima defensa de nuestros intereses en Centroamérica”, pues ello implicaría “un inexplicable abandono de nuestras responsabilidades políticas”.²⁴

La percepción mexicana de las inspecciones se afianzó a raíz de que Estados Unidos dio una explicación falsa de las mismas. Obstaculizar el tránsito era obviamente un medio de ejercer presión sobre México

²³ “Desde Washington, ¿Y ahora qué?”, *Excélsior*, 7 de marzo de 1985, p. 7.

²⁴ “No renunciará México a sus intereses en CA”, *Excélsior*, 15 de marzo de 1985, p. 1.

para que hiciera más expedita su investigación, y no un intento por encontrar a Camarena Salazar. Localizar al agente era tan poco probable, que la voluntad declarada de conseguirlo sólo sirvió para enturbiar los motivos reales de Estados Unidos, y hacer que los mexicanos dudaran más aún de las afirmaciones norteamericanas. Dijo un editorial de *El Diario de Monterrey*:

Le llaman Operación Interceptación y en apariencia tiene por objetivo buscar al agente desaparecido y parar el tráfico de drogas. ¡Como si un secuestrado fuera a pasar por los puentes, como si las cargas de droga no pasaran por mar y por cielo! Se trata, de plano, de un gesto inamistoso, [...] de una medida de presión injusta, ruda [...] ²⁵

Las inspecciones a lo largo de la frontera dieron lugar a enormes filas de autos, y la economía de la región inmediatamente comenzó a sentir el efecto de la medida. El escándalo que se produjo, del lado mexicano, aumentó la presión sobre el gobierno de México para hallar alguna forma de resolver el problema. Conforme pasaban los días, las relaciones se volvían más tensas. Finalmente, el 22 de febrero, la presidencia de México anunció que De la Madrid había sostenido una conversación telefónica “cordial y amistosa” con Reagan. “Hablaron sobre varios asuntos, en particular acerca de la sobrevigilancia que se ha establecido por el gobierno estadounidense en la frontera, misma que está ocasionando graves trastornos en el movimiento de personas, bienes y vehículos entre los dos países.” ²⁶

En esa conversación, De la Madrid propuso una reunión de los procuradores generales de ambos países para llevar a cabo un análisis profundo del narcotráfico. Reagan, a su vez, prometió normalizar la situación en la frontera. El levantamiento de la Operación Interceptación marcó el fin de la etapa más difícil del problema entre México y Estados Unidos por el tráfico de drogas. Sin embargo, los organismos norteamericanos ejecutores de la ley siguieron mostrando descontento ante la forma en que los mexicanos manejaban la investigación. Frances Mullen, jefe de la DEA en los inicios del caso, se quejó, en la prensa, de las autoridades mexicanas. ²⁷ También su sucesor, Jack Lawn, expresó desaprobación en público. Aunque no quedó claro si la Casa Blanca autorizó estos comentarios tan críticos, el hecho es que causaron mucho resentimiento en México.

²⁵ “Gesto inamistoso”, *Excelsior*, 27 de febrero de 1985.

²⁶ *Proceso*, núm. 434, p. 18.

²⁷ *Newsweek*, 18 de marzo de 1985, p. 30.

Pero siguió habiendo motivos válidos para que los funcionarios norteamericanos se sintieran frustrados. Reportajes en la prensa estadounidense mostraron que la policía de México fabricó evidencias, en un intento por calmar a Estados Unidos. Por ejemplo, las autoridades mexicanas arrestaron a un ex policía, Tomás Morlett Borges, como sospechoso principal de los secuestros, y poco después tuvieron que liberarlo, pues carecían de pruebas; la forma en que lo arrestaron, aunada a la falta de evidencias, llevó a los funcionarios norteamericanos a concluir que esa detención fue una farsa elaborada para consumo de Estados Unidos.²⁸ La implicación de la policía mexicana en el narcotráfico se hizo aún más obvia cuando las autoridades consignaron a seis policías estatales de Jalisco, bajo cargos relacionados con el secuestro y asesinato de Camarena Salazar. Los agentes arrestados confesaron recibir de 200 a 6 250 dólares al mes de los narcotraficantes, como “dinero de protección”.²⁹

La situación empeoró en esas semanas, ya que aumentó, en la frontera, la violencia relacionada con el tráfico de drogas. A principios de marzo, por ejemplo, unos narcotraficantes mataron a la mitad de la fuerza policiaca de San Fernando, pueblo a 30 millas de la frontera tejana. Además, el Servicio Aduanal de Estados Unidos, al tener indicios de que iban a secuestrar o asesinar a otro de sus agentes, cerró 9 puestos fronterizos y armó a sus miembros.³⁰

En un artículo publicado el 18 de marzo, *Newsweek* citó fuentes de la DEA que reportaban que el secuestro y asesinato se llevó a cabo por órdenes de la banda que dirigía Rafael Caro Quintero.³¹ De acuerdo con versiones de funcionarios norteamericanos en México, Caro Quintero era parte de un grupo llamado “La Familia”, compuesto por cuatro cabecillas del narcotráfico. Ernesto Fonseca Carrillo dirigía las operaciones de heroína, Juan Matta Ballesteros y Miguel Félix Gallardo encabezaban las de cocaína, y Rafael Caro Quintero se encargaba de las de mariguana.³²

A comienzos de marzo, un anónimo en inglés, proveniente de Los Ángeles, informó a la Policía Judicial de Jalisco que Camarena Salazar y Zavala Avelar estaban en un rancho llamado El Mareño, en Michoacán; 100 agentes rodearon el rancho el 2 de marzo; uno de ellos murió en la balacera subsecuente, que duró hora y media; también murieron el dueño del rancho, su mujer y dos hijos. Se capturó a cinco perso-

²⁸ *Ibid.*, p. 29.

²⁹ *Time*, 1 de abril de 1985, p. 27.

³⁰ *Time*, 18 de marzo de 1985, p. 23.

³¹ *Newsweek*, 18 de marzo de 1985, p. 29.

³² *Newsweek*, 22 de abril de 1985, p. 34.

nas.³³ Después del allanamiento, los agentes de la DEA y la policía mexicana hicieron una búsqueda minuciosa, sin hallar rastros de Camarena ni de Zavala. Sin embargo, tres días después, un campesino descubrió los cuerpos de ambos junto a la carretera que lleva al rancho. Según *Time*, estos hechos hicieron suponer a funcionarios norteamericanos que la policía abrió fuego sin provocación suficiente. Para justificar la balacera, la policía tal vez puso cocaína en la casa y luego los cuerpos cerca,³⁴ en cuyo caso habría sabido de antemano quién secuestró y mató a los dos hombres.

El 22 de marzo, en una reunión del procurador general de México, Sergio García Ramírez, y su contraparte en Estados Unidos, Edwin Meese, se anunció un nuevo pacto para tratar el tráfico de drogas. Como muestra del interés del gobierno mexicano en que pareciera que volvía a prevalecer un espíritu de cooperación, García Ramírez comentó que este acuerdo establecía mecanismos “claros, honestos y francos” para tratar el fenómeno, y que había comenzado un diálogo “digno y claro”. El pacto fue bien acogido en la prensa mexicana, como se refleja en un editorial de *Excelsior*: “La entrevista tenida por los procuradores generales de México y Estados Unidos tiene todos los visos de haber sido muy fructífera. El solo hecho de estar de acuerdo en la forma de enfocar el problema es muy significativo, pues indica que se perseguirá una táctica de común acuerdo.”³⁵

La fase más crítica del problema terminó el 5 de abril con la captura de Rafael Caro Quintero en Costa Rica. Si bien Matta Ballesteros y Félix Gallardo habían escapado y permanecían prófugos, a la captura de Caro Quintero pronto siguió el arresto de Fonseca Carrillo en Puerto Vallarta. Los funcionarios norteamericanos reaccionaron a los arrestos elogiando los esfuerzos mexicanos por resolver el caso. Edwin Meese telefoneó a su contraparte para agradecerle el vigor de esos esfuerzos. El jefe en turno de la DEA, Jack Lawn, que había criticado mucho el manejo mexicano del caso, declaró: “En los niveles más elevados, los mexicanos son sumamente serios para atajar la corrupción [...] Están detectando y destruyendo las organizaciones más importantes del narcotráfico, que han podido sobrevivir en México por la corrupción de los funcionarios [menores] encargados de ejecutar la ley.”³⁶

De las confesiones de Caro Quintero después de su arresto, salió

³³ *Proceso*, núm. 436, 11 de marzo de 1985, p. 8.

³⁴ *Newsweek*, 18 de marzo de 1985, p. 29.

³⁵ “Pacto México-E.U.: lucha común contra el narcotráfico”, *Excelsior*, 23 de marzo de 1985, pp. 1, 6.

³⁶ *Newsweek*, 22 de abril de 1985, p. 34.

a la luz más información sobre la corrupción de policías mexicanos. Por ejemplo, Caro Quintero reveló cómo pudo despegar su avión de Guadalajara. El comandante de la Policía Judicial Federal de México a cargo de la investigación del caso Camarena, Jorge Armando Pavón Reyes, se encontró con Caro Quintero en el aeropuerto; después de una breve discusión, Caro Quintero firmó un cheque por sesenta millones de pesos que entregó a Pavón Reyes; a pesar de las peticiones de los hombres de la DEA que estaban ahí, se permitió huir a Caro Quintero.

También salieron a la luz los motivos de los secuestros. Fonseca Carrillo declaró en su confesión que Caro Quintero supuso, erróneamente, que Camarena Salazar era jefe de la oficina local de la DEA. El año anterior, agentes norteamericanos habían descubierto y destruido una enorme plantación de mariguana en Chihuahua, que pertenecía a Caro Quintero. Éste, al secuestrar a Camarena Salazar, esperaba averiguar cómo descubrieron la operación los estadounidenses. Llevaron a cabo el secuestro miembros de la policía estatal pagados por Caro Quintero.³⁷

Aunque después de los arrestos disminuyó la información de la prensa sobre el caso, quedó a los mexicanos un mal sabor de boca por la forma en que se manejó el caso en Estados Unidos y México. Por ejemplo, en un editorial publicado el 10 de abril, Lorenzo Meyer escribió:

Todo indica que tanto el gobierno como los medios de difusión de Estados Unidos han decidido finalmente enterrar a Enrique Camarena. Sin embargo, el daño ya está hecho. Por un lado, la actitud prepotente del gobierno norteamericano (respaldado por la prensa), y por el otro, una actitud pusilánime (¿de culpable?) del gobierno mexicano, lograron dejar una imagen muy pobre de México en la conciencia del público norteamericano e internacional.³⁸

A lo largo de la crisis, la visión persistente y muy difundida entre los mexicanos de que las medidas estadounidenses relativas al secuestro de Camarena eran más bien una forma de influir en la actitud de México respecto a otros asuntos, sobrestimó el grado en que Estados Unidos vincula y coordina sus políticas. Hubo otra percepción errónea: en general, los mexicanos nunca entendieron cuán importante era en sí, para Estados Unidos, el esclarecimiento del secuestro de Camarena; pensaron, más bien, que en el contexto de las relaciones entre ambos países la desaparición de un agente anti-narcóticos resultaba, a lo sumo,

³⁷ *Time*, 22 de abril de 1985, p. 33.

³⁸ “Desde Washington: advertencias y consejos”, *Excelsior*, 10 de abril de 1985, p. 7.

secundaria; y ya que, por otra parte, la política de México hacia Centroamérica era un asunto de primera importancia, los mexicanos consideraron que el tipo y el carácter de las políticas de Estados Unidos sólo podían atribuirse al afán norteamericano de lograr un alineamiento de México con la superpotencia frente a Centroamérica.

Pero a juzgar por el malestar genuino que reflejó la prensa de Estados Unidos, la obstrucción del tránsito fronterizo fue resultado de la frustración norteamericana ante el manejo del caso Camarena, y no una tentativa de influir en objetivos internacionales más amplios de México. La Operación Interceptación es ejemplo de política reactiva, diseñada con precipitación; no fue una medida calculada o deliberada para modificar el curso general de la política exterior mexicana. Después de recibir seguridades de que el gobierno de México aumentaría sus esfuerzos contra el narcotráfico, Estados Unidos puso fin rápidamente a sus medidas de obstrucción de la frontera. Esto constituye una prueba de que la medida se tomó sólo para hacer frente a una situación particular: si el propósito norteamericano hubiera sido inducir cambios fundamentales en la política exterior de México, seguramente se habría mantenido la presión por un periodo más prolongado.

Como revela el caso Camarena, el deseo de seguir una política exterior muy independiente no deja de tener riesgos para el gobierno mexicano, dadas las percepciones erróneas de las intenciones de Estados Unidos. Esto no significa que México deba abandonar una política exterior de esa naturaleza, que ha producido grandes ganancias políticas en el plano interno y en el exterior, sino que las autoridades mexicanas podrían escoger con más cuidado los momentos para oponer resistencia, a fin de evitar el tipo de situaciones embarazosas que padecieron en el caso Camarena. Si el gobierno de México hubiera percibido la importancia que tenía, para Estados Unidos, el esclarecimiento del secuestro, quizá hubiera seguido las investigaciones con más vigor desde el principio, para demostrar su voluntad de combatir a los narcotraficantes. Incluso un esfuerzo relativamente simbólico, encauzado hacia unos cuantos individuos, habría contrarrestado la imagen de indolencia del gobierno mexicano, que tanto daño le causó en el plano internacional.

Lo anterior, combinado con una cooperación mayor aunque discreta, tal vez hubiera evitado que Estados Unidos juzgara necesario presionar a México en público, pero no fue así: el problema creció hasta que llegó a un punto en que la presión pública substituyó la diplomacia. Las autoridades mexicanas parecieron entonces corruptas e ineptas ante los ojos del mundo. Una cosa es resistir a la presión de Estados

Unidos en casos en que, dentro y fuera de México, muchos creen que el gobierno mexicano tiene una posición moral superior, como en lo que se refiere a su política hacia Centroamérica; otra cosa es presentar resistencia en una cuestión como el narcotráfico, cuando la falta de acciones enérgicas contra los narcotraficantes puede interpretarse como prueba de corrupción y deterioro moral.

En conclusión, percepciones equivocadas de la naturaleza y las intenciones de la política de Estados Unidos pueden llevar al gobierno mexicano a cometer errores con elevados costos políticos. Cierta tendencia reactiva y mecánica a resistir públicamente a Estados Unidos, puede ser tan peligrosa como lo sería la aquiescencia a ciegas. Sólo la capacidad de analizar la política estadounidense en su dimensión real, permitirá al gobierno mexicano evitar equivocaciones como las que sufrió en el caso Camarena.